

# LA CONTRATACIÓN ESTATAL: TEORÍA GENERAL

Perspectiva comparada y regulación internacional

---

*Carlos Guillermo Castro Cuenca*  
*Luisa Fernanda García López*  
*Juan Ramón Martínez Vargas*



---

*Colección Textos de Jurisprudencia*



**UR**

# La Contratación Estatal: teoría general

Perspectiva comparada y regulación  
internacional

Carlos Guillermo Castro Cuenca  
Luisa Fernanda García López  
Juan Ramón Martínez Vargas



COLECCIÓN TEXTOS DE JURISPRUDENCIA

© 2010 Editorial Universidad del Rosario  
© 2010 Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario,  
Facultad de Jurisprudencia  
© 2010 Carlos Guillermo Castro Cuenca, Luisa Fernanda García López,  
Juan Ramón Martínez Vargas  
© 2010 Enrique José Arboleda Perdomo, por el Prólogo

ISBN: 978-958-738-099-6

Primera edición: Bogotá D.C., marzo 2010  
Coordinación editorial: Editorial Universidad del Rosario  
Corrección de estilo: María José Díaz Granados M.  
Diseño de cubierta: Lucelly Anacondas  
Diagramación: Precolombi EU  
Impresión: Javegraf  
Editorial Universidad del Rosario  
Carrera 7 No. 13-41, oficina 501 • Tel: 297 02 00, ext. 7724  
Correo electrónico: editorial@urosario.edu.co

Todos los derechos reservados.  
Esta obra no puede ser reproducida sin el permiso previo escrito  
de la Editorial Universidad del Rosario

---

Castro Cuenca, Carlos Guillermo  
La Contratación Estatal: teoría general. Perspectiva comparada y regulación internacional /  
Carlos Guillermo Castro Cuenca, Luisa Fernanda García López y Juan Ramón Martínez Vargas.  
—Facultad de Jurisprudencia. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2009.  
316 p.—(Colección Textos de jurisprudencia).

ISBN: 978-958-738-099-6

Administración pública / Contratos administrativos / Contratos públicos – Estudio de casos /  
Derecho administrativo / I. García López, Luisa Fernanda / II. Martínez Vargas, Juan Ramón / III.  
Título / II. Serie.

350.711 SCDD 20

---

Impreso y hecho en Colombia  
*Printed and made in Colombia*

# Contenido

Abreviaturas .....	13
--------------------	----

Prólogo.....	19
--------------	----

Enrique José Arboleda Perdomo

## Primera parte

### Teoría general de la contratación administrativa

#### Capítulo primero

La administración pública y la contratación pública .....	27
1. Los sentidos orgánico y funcional de la administración pública.....	27
2. Fundamentos del concepto material de administración pública .....	28
2.1. Una primera etapa: el interés general.....	28
2.2. Una segunda etapa: el servicio público .....	30
2.3. Una tercera fase: el deber y el derecho correlativo al buen funcionamiento de la administración pública.....	34
3. Elementos del concepto de administración pública .....	39
3.1. El interés general.....	39
3.2. Los principios de objetividad e imparcialidad.....	41
3.3. El principio de legalidad .....	43
3.4. El principio de eficacia y otros relacionados con la misma .....	44

## Capítulo segundo

Origen y desarrollo de la contratación pública.....	49
1. Origen y reconocimiento de los contratos públicos .....	49
1.1. Francia .....	50
1.2. Alemania .....	53
1.3. Italia .....	55
1.4. Inglaterra .....	58
1.5. España .....	60
1.6. Latinoamérica .....	64
1.7. Estados Unidos .....	70
1.8. Resto del mundo .....	72
2. Contratos administrativos y contratos de derecho privado de la administración.....	78
3. Concepto de contratos de las administraciones públicas.....	87

## Capítulo tercero

Los principios de la función y de la contratación públicas .....	89
1. Los principios de la función pública.....	89
1.1. El principio de igualdad.....	96
1.2. El principio de moralidad .....	98
1.3. El principio de eficacia .....	102
1.4. El principio de economía.....	107
1.5. El principio de celeridad .....	108
1.6. El principio de imparcialidad .....	109
1.7. El principio de publicidad .....	112
2. Los principios de la contratación pública.....	120
2.1. Principio de publicidad o transparencia .....	123
2.2. Principio de libre concurrencia.....	130

2.3. Principio de selección objetiva .....	150
2.4. Principio de economía.....	153
2.5. Principio de responsabilidad.....	158

## Segunda parte

### Aspectos particulares de la contratación pública

#### Capítulo cuarto

La capacidad.....	165
1. La capacidad de las entidades estatales .....	165
2. La capacidad de los contratistas .....	167
3. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades en los procesos de contratación pública .....	171
3.1. El régimen de incompatibilidades en España .....	172
3.2. El régimen de incompatibilidades en los países latinoamericanos.....	176
3.3. Formas de sanción de la infracción del régimen de incompatibilidades .....	197
4. La subcontratación .....	200

#### Capítulo quinto

El desarrollo del proceso de contratación .....	205
1. Procedimiento precontractual.....	205
1.1. La licitación .....	205
1.2. Contratación directa.....	230
1.3. La selección abreviada.....	238
1.4. Concurso de méritos .....	252

2. El contrato estatal .....	254
2.1. Características fundamentales .....	254
2.2. Perfeccionamiento .....	255
2.3. El marco jurídico de la contratación estatal.....	256
3. La fase de ejecución del contrato .....	262
3.1. Cláusulas exorbitantes .....	262
3.2. La liquidación de los contratos .....	282
 Bibliografía.....	 285



*A la Facultad de Jurisprudencia  
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario  
A nuestros estudiantes  
A nuestras familias*

## Abreviaturas

<i>AAP</i>	Auto de la Audiencia Provincial
<i>AA.VV.</i>	Autores varios
<i>ACSCJ</i>	Auto de la Corte Suprema de Justicia de Colombia
<i>ADPCP</i>	Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales
<i>AP</i>	Actualidad Penal
<i>ATS</i>	Auto del Tribunal Supremo
<i>ATSJ</i>	Auto del Tribunal Superior de Justicia
<i>AVE</i>	Alta Velocidad Española
<i>BM</i>	Banco Mundial
<i>BOE</i>	Boletín Oficial del Estado
<i>CAN</i>	Comunidad Andina de Naciones
<i>CC</i>	Código Civil
<i>CCAC</i>	Código Contencioso Administrativo de Colombia
<i>CCE</i>	Código Civil Español
<i>CDJ</i>	Cuadernos de Derecho Judicial
<i>CDUC</i>	Código Único Disciplinario de Colombia
<i>CE</i>	Constitución de España (Constitución española)
<i>CEE</i>	Comunidad Económica Europea
<i>CGPJ</i>	Consejo General del Poder Judicial
<i>CICC</i>	Convención Interamericana contra la Corrupción
<i>CNUCC</i>	Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción
<i>COMMSA</i>	Concesionario del Magdalena Medio S.A.
<i>COI</i>	Comité Olímpico Internacional
<i>CP</i>	Código Penal
<i>CPC</i>	Constitución Política de Colombia
<i>CPI</i>	Corte Penal Internacional
<i>CTAR</i>	Consejo Transitorio de Administración Regional
<i>EBEP</i>	Estatuto Básico del Empleado Público
<i>EBI</i>	Entreprises Berthier Inc

ECAC	Estatuto de Contratación Administrativa de Colombia (Ley 80 de 1993)
ECPI	Estatuto de la Corte Penal Internacional
<i>EPC</i>	Estudios Penales y Criminológicos
ESCCR	Estatuto de servicio civil de Costa Rica
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FAR	Federal Acquisition Regulation
FMI	Fondo Monetario Internacional
FPÖ	Freiheitliche Partei Österreichs
GAO	General Accounting Office of the United States of America
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
GSABCA	General Services Administration Board of Contract Appeal
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
IGAE	Intervención General de la Administración del Estado
IPC	Índice de percepción de la corrupción
Lacap	Ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública (Decreto 868 de 2000)
LAOPB	Ley administrativa de obras públicas de Bolivia (Decreto Supremo 25964 de 6 de julio de 2000)
LOPM	Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas de México (29 de diciembre de 1999)
LAU	Ley sobre el uso indebido del poder público (Corrupción) de Uruguay
LBCAC	Ley de bases sobre contratos administrativos de Cuba
LBCAP	Ley de bases de carrera administrativa de Perú (Decreto Legislativo 276 de 1984).
LCACR	Ley de contratación administrativa de Costa Rica (7494 de 24 de abril de 1995).
LCAG	Ley de lo contencioso administrativo de Guatemala
LCAV	Ley de carrera administrativa de Venezuela
LCE	Ley de contratación pública del Ecuador (Codificación No. 000. RO/ 272 de 22 de febrero del 2001)
LCEG	Ley de contrataciones del Estado de Guatemala (Decreto 57 de 1992)
LCEH	Ley de contratación del Estado de Honduras (publicada en el 29.583 del Diario Oficial <i>La Gaceta</i> , de fecha 17 de septiembre de 2001)
LCPN	Ley de contrataciones del Estado de Nicaragua (Ley 323 de 1999)
LCPP	Ley de contratos públicos del Paraguay (2.051 de 2003).

LCPYAP	Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado (Decreto supremo 084 de 2004)
LCSP	Ley de contratos del sector público
LECAP	Ley por la cual se establece y regula la Carrera Administrativa (9 de 20 de junio de 1994)
LEC	Ley de enjuiciamiento criminal
LEFPB	Ley del estatuto del funcionario público de Bolivia (Ley 2027 del 27 de octubre de 1999)
LEFPV	Ley del Estatuto de la Función Pública de Venezuela
LFPP	Ley de la función pública del Paraguay (Ley 1.626)
LFCEE	Ley de funcionarios civiles del Estado de España
LFTCu	Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas
LGP	Ley general presupuestaria
LGS	Ley general de subvenciones
LJCA	Ley de la jurisdicción contencioso administrativa de España
LJCAH	Ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo de Honduras
LL	<i>Revista Jurídica Española (La Ley).</i>
LLV	Ley de licitaciones de Venezuela
Lopav	Ley orgánica de procedimientos administrativos de Venezuela
LOTc	Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
LOTcu	Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas
LPAA	Ley de procedimiento administrativo (Ley 19.549)
LPAGP	Ley del procedimiento administrativo general del Perú (Ley 27444)
LPAP	Ley de patrimonio de las administraciones públicas
LRJAP	Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas
LPSPEN	Ley de probidad de los servidores públicos del Estado (Ley 438)
LSCCAE	Ley de servicio civil y carrera administrativa del Ecuador
LSCEL	Ley del servicio civil de El Salvador
LSCES	Ley del servicio civil de El Salvador
LSCG	Ley del servicio civil de Guatemala (Decreto 1748)
LSCH	Ley del servicio civil de Honduras (Decreto 126, emitido el 28/10/1967)
Mercosur	Mercado Común del Sur
NBB	Normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios de Bolivia (Decreto Supremo 29110 de 2007)
Nm.	Número marginal

<i>NPP</i>	<i>Nuevo pensamiento penal. Revista de derecho y ciencias penales</i>
OCDE	Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico
OEA	Organización de Estados Americanos
OMC	Organización Mundial del Comercio
PE	parte especial
Pemex	Petróleos Mexicanos
PG	parte general
PJ	Poder Judicial
PRI	Partido Revolucionario Institucional
<i>PRS</i>	<i>Papers: Revista de Sociología</i>
PSOE	Partido Socialista Obrero Español
PTB	Partido del Trabajo de Brasil
<i>RAP</i>	<i>Revista de la Administración Pública</i>
RCANA	Régimen de contrataciones de la administración nacional (Decreto 1023/2001 con las modificaciones introducidas por los Decretos 666/2003 y 204/2004 y por la Ley 25.563)
<i>RDP</i>	<i>Revista de Derecho Penal</i>
<i>RDPC</i>	<i>Revista de Derecho Penal y Criminología</i>
<i>RDPP</i>	<i>Revista de Derecho y Proceso Penal</i>
<i>RDPPP</i>	<i>Revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario</i>
<i>REDA</i>	<i>Revista Española de Derecho Administrativo</i>
<i>REDC</i>	<i>Revista Española de Derecho Constitucional</i>
<i>REDPC</i>	<i>Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología</i>
<i>REP</i>	<i>Revista de Estudios Penitenciarios</i>
Repepos	Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
<i>RFDUC</i>	<i>Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense</i>
<i>RFDUG</i>	<i>Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada</i>
<i>RGDE</i>	<i>Revista General de Derecho Europeo</i>
<i>RGLJ</i>	<i>Revista General de Legislación y Jurisprudencia</i>
<i>RLJ</i>	<i>Revista de Legislación y Jurisprudencia</i>
<i>RMF</i>	<i>Revista del Ministerio Fiscal</i>
<i>RO</i>	<i>Revista de Occidente</i>
<i>RP</i>	<i>Revista Penal</i>
<i>RPJ</i>	<i>Revista del Poder Judicial</i>

RRFRB	Reglamento de la responsabilidad por la función pública (Decreto supremo 23318- A)
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
SCA	Sentencia de la Corte de Apelaciones de Chile
SCC	Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia
SCCI	Sentencia de la Corte de Casación de Italia
SCSJC	Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia
Secop	Sistema Electrónico para la Contratación Pública
SPÖ	Sozialdemokratische Partei Österreichs
STC	Sentencia(s) del Tribunal Constitucional (España)
StPO	Strafprozessordnung
STEDH	Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
StGB	Strafgesetzbuch
STJCE	Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
STS	Sentencia del Tribunal Supremo (España)
STSJ	Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
TC	Tribunal de Conflictos
TEDH	Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Topuf	Texto ordenado de las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de funcionarios públicos
TRLCAP	Texto refundido de la ley de contratos de la administración pública
TS	Tribunal Supremo
UE	Unión Europea
Uncitral	United Nations Commission for International Trade Law
Unicef	United Nations International Children's Emergency Fund
USOC	United States Olympic Committee
VbV	Vergabeverordnung
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistung
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz

## Prólogo

Tres jóvenes profesores de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, los doctores Carlos Guillermo Castro Cuenca, Luisa Fernanda García López y Juan Ramón Martínez Vargas, dos de ellos antiguos alumnos del curso de contratos estatales, me han hecho el honor de permitirme prologar su libro sobre la Contratación Estatal, que en la actualidad jurídica del país es una de las materias de mayor debate, la cual ha generando múltiples discusiones y, sobre todo, la necesidad de hacer estudios en derecho comparado, como los que se plantean en el libro.

La lectura del texto me indujo a reflexionar sobre los cambios en el lenguaje de la ley, pues me parece que el legislador ha preferido dejar de lado términos cuyo significado estaba muy decantado, sustituyéndolos en el derecho positivo por palabras que son menos precisas desde el punto de vista jurídico, pero que en el lenguaje corriente son mucho más descriptivas y orientadoras de la conducta de los asociados, buscando con ello una mayor eficacia normativa. Esta situación pone al intérprete en la necesidad de valorar si el sentido de las nuevas palabras se adapta a las definiciones de los términos clásicos, y si esto no es posible, deberá construir nuevas categorías jurídicas, partiendo de las ya definidas. La pregunta que surge a continuación, cuya respuesta escapa a estas líneas introductorias, es si realmente el cambio de lenguaje conlleva una mayor eficacia normativa o si, por el contrario, introducir en la ley vocablos del sentido común desdibuja el rigor de las instituciones causando confusión.

Para ilustrar tal reflexión utilizaré dos de las instituciones que se tratan en este libro, el principio de transparencia y el de selección objetiva. Al efecto, compararé el principio de transparencia con el principio de publicidad, y el de selección objetiva con la institución del acto reglado.

La publicidad de las actuaciones públicas está bastante aclimatada, y se puede decir que el contenido de este principio se edificó a partir de los cambios institucionales y políticos causados por las revoluciones del último cuarto del siglo XVIII. Entonces, por principio de publicidad se entiende generalmente que

ninguna autoridad puede tomar decisiones secretas, y que el procedimiento para su adopción debe ser conocido por la ciudadanía y por los posibles afectados. De estas primeras ideas se desprenden las reglas que ordenan que los debates legislativos sean públicos, lo mismo que las actuaciones administrativas y gubernamentales y, en fin, las múltiples garantías del proceso judicial que se engloban bajo el nombre de principio de publicidad. En nuestro país, este principio fue elevado a rango constitucional por el constituyente de 1991 en el artículo 209 de la Carta.

En cuanto a las decisiones administrativas, de este principio se derivan muchísimas reglas de derecho, como por ejemplo la obligación de publicar la totalidad de los mandatos gubernamentales y administrativos en los periódicos oficiales; de permitir el estudio y sacar copias de todos los documentos; de informar a los afectados e interesados del inicio de todo procedimiento; de entregar y permitir el estudio de los actos previos a la toma de la decisión; la posibilidad para cualquier persona, aun sin interés directo, de revisar y estar atenta a la adopción de cualquier determinación administrativa, salvo escasas excepciones legales; en fin, se ha entendido que este conjunto de reglas que desarrollan el principio de publicidad permiten un diálogo franco y permanente entre los administrados y la administración.

Al lado de este principio se ha estructurado el de transparencia, a partir del cual se han expedido reglas similares a las que desarrollan el principio de publicidad, agregando un cariz a ese diálogo que pretende abrir este último: que las decisiones administrativas no sólo sean conocidas, sino que además la ciudadanía debe estar informada sobre las mismas aún antes de adoptadas, de manera que pueda anticipar y comprender claramente, sin ambigüedad, el objeto de la decisión y su razonabilidad. Se busca una nueva actitud del órgano o la autoridad frente a la comunidad, que sobrepasa la simple publicidad.

Hace 25 años, cuando se expidió el actual Código Contencioso Administrativo, se entendía que para proteger al particular era suficiente consagrar el principio de publicidad y desarrollarlo mediante un conjunto de reglas jurídicas precisas como las que se han esbozado. En la Constitución Política de 1991, y a partir de ésta en varias leyes, entre ellas la Ley 80 de 1993, se enlista y pretende desarrollar el principio de transparencia con normas que en general son similares a las que se desprenden del principio de publicidad, pese a lo cual hay



una diferencia en el tono de las mismas, en las que se busca crear —sin lograrlo al menos en la última ley citada— la obligación para la administración de ir hacia el ciudadano para informarlo, dando a conocer sus decisiones, explicándolas para que sean comprendidas y, sobre todo, para mostrar la rectitud de las mismas.

La cuestión es entonces si se justificaba elaborar un nuevo principio a partir del de publicidad, o si era suficiente con agregarle ese nuevo cariz, obligando a la administración a salir de sus oficinas para informar a la ciudadanía sobre sus decisiones. Pero la pregunta es si es más eficiente definir múltiples principios, o tal vez mantener unos pocos suficientemente regulados.

El principio de selección objetiva en la contratación nos permite hacer una reflexión similar, pues si se revisan las normas que lo desarrollan, bien pueden enmarcarse dentro de la institución del acto reglado, como análisis enseguida.

Se entiende, por lo general, que una decisión administrativa encaja en la noción de acto reglado cuando la ley y los reglamentos ordenan adoptar la decisión sobre cierta situación jurídica, en un determinado sentido, siendo ilegal una decisión diferente. Por el contrario, se entiende como acto discrecional, aquella resolución administrativa en la cual la administración puede optar entre varias soluciones posibles, siendo válida cualquiera que escoja. En este último caso, la ley y los reglamentos le permiten a la autoridad que expide el acto que, previa una evaluación de las circunstancias, escoja la medida que mejor se adapte a las circunstancias y a las orientaciones políticas del gobierno. En el primer grupo de actos se entiende entonces que cualquier persona que siga la ley y los reglamentos debe llegar a la misma decisión, por tanto, ésta es totalmente objetiva; mientras que en la decisión discrecional hay un elemento de gobierno, entendido como la toma de las decisiones con un sentido político, esto es, buscando una determinada finalidad social, por lo que muy posiblemente dos personas con ideologías o programas políticos diferentes, adoptarían decisiones diversas, todas ellas permitidas por la ley, y por eso jurídicamente válidas. En este caso, el control judicial sobre el sentido de la decisión se hace primordialmente por la vía del desvío de poder, mientras que en el acto reglado se hace por violación directa de las normas a las que está sometido el acto.

Cuando se leen las reglas que regulan la selección objetiva en la Ley 80 de 1993 —elevada a principio por la misma ley—, éstas contienen un conjun-

to de normas que obligan a la administración a seleccionar objetivamente a su contratista, para lo cual le imponen la obligación de expedir unos pliegos de condiciones lo suficientemente claros y precisos para que todo el que evalúe las propuestas llegue a la misma conclusión sobre el adjudicatario del contrato. Si los pliegos —que son el reglamento del procedimiento de selección del contratista y del contrato— están correctamente elaborados, no debe haber discrecionalidad por parte de la autoridad que ha de adjudicar y, por lo mismo, se dice que su selección ha sido objetiva; por el contrario, si hay margen para escoger al contratista con base en criterios que no estén expresamente definidos en los pliegos, se dice que se violó la objetividad del proceso puesto que la selección se hizo en forma subjetiva. A partir de esta constatación es claro que la diferencia entre la selección objetiva y la subjetiva es la misma que existe entre acto reglado y acto discrecional, de manera que habría bastado con que la Ley 80 de 1993, en vez de elevar a rango de principio del derecho la selección objetiva, hubiera usado la institución del acto administrativo reglado y, a partir de ella, hubiera estructurado el proceso de selección del contratista.

Surgen nuevamente los interrogantes antes expuestos, pero en especial es bueno reflexionar sobre los vocablos que utiliza la ley, pues es claro que para el hombre de la calle, no especializado en los temas jurídicos, tiene mayor sentido que la ley le hable de transparencia en vez de publicidad, y de selección objetiva en vez de selección mediante acto administrativo reglado; pero también es cierto que no todos entienden por transparencia o por selección objetiva lo mismo, mientras que en general los juristas están de acuerdo sobre lo que significa el principio de publicidad o el acto reglado.

De lo expuesto surge además este otro comentario: el legislador ha preferido denominar como principios del derecho a un conjunto de reglas que hasta hace poco se conocían como instituciones jurídicas, entendiendo por éstas aquellas grandes categorías que en lo esencial son universalmente aceptadas, se ensamblan entre sí en forma sistemática, y están compuestas por un conjunto de normas jurídicas coherentes, que reflejan tanto la esencia de la institución como las peculiaridades del derecho de cada país. A manera de ejemplo se puede hablar de la institución del matrimonio, del contrato, de la propiedad, etc. Cambiar el lenguaje jurídico para utilizar términos más descriptivos para el ciudadano corriente, abandonando la terminología basada en instituciones ju-

ridicas, sacrifica la precisión causando inseguridad jurídica, al menos mientras la jurisprudencia y la doctrina decantan y delimitan el sentido de los nuevos términos legales.

Es forzoso concluir este prólogo haciendo una breve referencia de los autores del libro. El profesor Carlos Guillermo Castro Cuenca es abogado de la Universidad del Rosario, Doctor en derecho de la Universidad de Salamanca, España; Especialista en derecho penal y ciencias criminológicas. Se desempeña como director del grupo de investigación de derecho de penal y codirector de la Especialización de Derecho Médico Sanitario y Profesor Principal de Carrera Académica de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. La profesora Luisa Fernanda García López es abogada de la Universidad del Rosario, Doctora en Derecho y DEA en derecho internacional público y en derecho publico de la Universidad Montpellier I, Francia. En la actualidad es Profesora Principal de Carrera Académica en Derecho Administrativo de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Por último, el doctor Juan Ramón Martínez Vargas es abogado de la Universidad del Rosario, Magíster DEA en derecho internacional y candidato a Doctor en Derecho de la Universidad Alfonso X El Sabio, España; Especialista en gerencia pública y control fiscal. En la actualidad se desempeña como Profesor Principal de Carrera Académica en derecho internacional público y derecho internacional de los negocios internacionales de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

Esta obra resulta una herramienta de especial importancia para el estudio de la contratación pública, que no se limita al ámbito local, sino que trasciende en el análisis transnacional de un tema estructural dentro de la administración pública contemporánea, con la seguridad de que alimentará las discusiones académicas y la construcción legislativa, y contribuirá en el desarrollo doctrinal del derecho público.

Enrique José Arboleda Perdomo  
Director del área de Derecho Administrativo  
Universidad del Rosario  
Magistrado del Consejo de Estado



Por medio de esta obra se pretende exponer una teoría general de la contratación pública enfocada a la elaboración de los principios generales que la desarrollen. Para ello, se realiza un estudio multidisciplinario desde la óptica del derecho

administrativo, el derecho constitucional y el derecho internacional para lograr una visión más amplia sobre las temáticas abordadas.

En el primer capítulo se establece la relación entre la contratación pública y la administración pública, exponiéndose la influencia de la primera en la formación paulatina de un concepto materia de la administración pública. El segundo capítulo, tiene por objeto la determinación del concepto de la contratación pública y su evolución, lo cual será el punto de partida para la construcción de la obra. El tercer capítulo examina los principios de la función pública y los principios de la contratación pública; en este capítulo se hace un especial énfasis en un estudio jurisprudencial del alcance de cada uno de los principios y sus consecuencias jurídicas concretas. El capítulo cuarto se orienta al estudio de la capacidad en la contratación estatal, analizándose de manera particular el sistema de inhabilidades e incompatibilidades contemplado en la constitución y en la ley administrativa. Para finalizar, el capítulo quinto estudia algunos aspectos relacionados con los procesos de contratación pública en sus diversas etapas, desde la formación de la voluntad de la administración con sus procesos de selección hasta el perfeccionamiento jurídico.

